

Santiago, siete de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, por sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno condenó a Ariel Alexander Galaz Naranjo a la pena de siete años y ciento ochenta y cuatro días de presidio mayor en su grado mínimo, por su responsabilidad en calidad de autor del delito de robo en lugar habitado, previsto y sancionado en el artículo 440 N° 1 con relación al artículo 432 del Código Penal, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, a la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, ilícito cometido en perjuicio de N.J.B.M el 11 de mayo de 2020, en la comuna de Rancagua.

En la misma sentencia se condenó a Paola Aurora Ahumada Jiménez a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, por su responsabilidad en calidad de autora del mismo delito, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, a la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

La defensa de los acusados dedujo recurso de nulidad en contra del referido fallo, el que fue admitido a tramitación y conocido en las audiencias de los días diecisiete y dieciocho de agosto pasado, según dan cuenta las actas de las audiencias de impugnación.

Considerando:

Primero: Que, como causal principal del arbitrio de nulidad se hizo valer aquella contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, por cuanto no se respetó el debido proceso durante el juicio oral que se desarrolló por video conferencia, al recibir el testigo de cargo Mauricio Guajardo



información durante su declaración que provocó que desconociera parte de lo que había expresado y lo modificara, una vez que el tribunal hizo un receso.

Indica que en el interrogatorio el fiscal intentó evidenciar una contradicción respecto de la fecha de los hechos, puesto que la declarada por el funcionario no coincidía con la de la acusación, al afirmar el testigo que habían ocurrido el 16 de marzo del 2020, mientras que en la acusación se señalaba el 11 de mayo del año 2020.

Precisa que decretado un receso, el testigo quedó en compañía del funcionario que lo acompañó a la diligencia, apagando su micrófono y evidenciándose que revisaba el aparato celular que utilizaba como cámara para declarar. Luego, la juez presidente le consulta al ministro de fe si el funcionario miró el celular y si lo hizo para observar un WhatsApp o para recordar algo del juicio. El funcionario, que actuaba como ministro de fe, responde que lo miró porque le había aparecido un mensaje que debía reiniciar audio y además, revisó otros mensajes que le habían llegado al sistema.

Añade que el vicio más grave se produce al no garantizarse por parte del tribunal que el testigo estuviese debidamente aislado, sin recibir información desde el dispositivo por el que se comunicaba y que nada contaminase su declaración, cuestión que el tribunal omitió al señalar que se dio por establecida la ocurrencia del hecho punible el día 11 de mayo del 2020 a través de lo expresado por los testigos Mauricio Guajardo y Nicolás Zamorano.

Concluye solicitando se acoja el recurso, se proceda a anular la sentencia definitiva y el juicio oral, y se disponga la realización de un nuevo juicio por el tribunal no inhabilitado que corresponda.



Segundo: Que, como causal subsidiaria, se invocó en el recurso la prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación al artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal, dado que no se realiza una fundamentación acorde a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal.

Arguye que la sentencia omitió el requisito establecido en la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal porque no señaló en la sentencia el contenido exacto de la información aportada por los medios de prueba, así como omitió hacer referencia a un determinado medio de prueba y no se hizo cargo de la información aportada por otro.

Explica que el tribunal a quo no se refirió a las declaraciones de los imputados como medio de defensa, como tampoco se hace cargo de las contradicciones existentes entre las declaraciones de los testigos prestadas en el juicio oral, valorando parcialmente la prueba rendida.

Termina pidiendo la anulación de la sentencia y el juicio oral, determinando el estado en que hubiere de quedar el procedimiento, y se ordene la remisión de los antecedentes al tribunal no inhabilitado que corresponda para que disponga la realización de un nuevo juicio oral.

Tercero: Que la sentencia impugnada, en su basamento octavo, tuvo por acreditado el siguiente hecho: *“Que el día 11 de mayo de 2020 aproximadamente a las 12,45 horas, los imputados Ariel Galaz Naranjo y Paola Ahumada Jiménez, llegaron al domicilio de la víctima N.J.B.M. ubicado en Callejón Los Kilos N° 0804, la cual salió a efectuar compras a un supermercado, lo que fue aprovechado por los acusados para ingresar a su domicilio, escalando el cierre perimetral, para luego romper una malla de protección de la puerta de la casa, procediendo en el interior a tomar y*



apropiarse de diversas especies, a saber: un televisor, mochila, joyas, para luego salir del inmueble con dichas especies en su poder, huyendo del lugar, hasta ser detenidos momentos después, a pocas cuadras del inmueble afectado por personal de carabineros”.

Estos hechos fueron calificados como un delito consumado de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, previsto y sancionado en los artículos 440 N° 1 en relación al 432, ambos del Código Penal.

Cuarto: Que, como se advierte, la causal principal invocada por el recurso denuncia la configuración de la hipótesis de nulidad fundada en el agravio a la garantía constitucional del debido proceso, la cual está dada por haberse desarrollado el juicio por video conferencia (zoom) y que se permitiera la declaración de funcionarios policiales sin tomar resguardos para que lo hicieran aisladamente.

Quinto: Que en lo referente a la garantía del debido proceso, cuya transgresión fue denunciada por el recurrente, se trata de un derecho sobre el cual existe actualmente coincidencia en que es el resultado de una larga evolución histórica e incorporado en Chile mediante el texto de la Constitución de 1980, en la que los comisionados entendieron el debido proceso como un principio que comprendía múltiples otras garantías judiciales y consideraron favorablemente la posibilidad de que su consagración cumpliera una función integradora de los derechos fundamentales. Siguiendo esa línea, se prefirió un concepto cuyas precisiones pudieran ir evolucionando de acuerdo con el tiempo y ser recogidas y puntualizadas por la jurisprudencia. Con el ingreso al ordenamiento jurídico nacional de la Convención Americana de Derechos Humanos (publicada en el Diario Oficial el 05 de enero de 1991) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (publicado con fecha 29 de abril



de 1989), se reunió un extenso catálogo de garantías judiciales, que aparecen enunciadas, como tales, en dichas convenciones, descritas con precisión y especificidad. La reforma procesal penal, a propósito del derecho a un debido proceso, convirtió en función central de la judicatura asegurar el respeto de los derechos fundamentales a través de diversos sistemas de control, preventivos y correctivos, inmersos en distintas normas del Código Procesal Penal. En esta realidad normativa, resulta evidente que se impone a los jueces la utilización de los principios constitucionales como estándares a los cuales debe enfrentarse ya no sólo la legislación, sino también la conducta de los agentes de la persecución penal e, incluso, de los propios jueces. El mensaje del Código Procesal Penal sostiene que deben explicarse los principios básicos que rigen el enjuiciamiento criminal, especificando los contenidos de la Constitución Política y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en que el eje del procedimiento está constituido por la garantía del juicio previo. “Otro de los principios generales del sistema propuesto consiste en la aplicación directa de las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos relevantes en cuanto a la regulación del procedimiento penal. Esta disposición obedece a la necesidad de reforzar la noción de que el procedimiento penal se organiza a partir del desarrollo de los principios generales del ordenamiento jurídico que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos y que se encuentran recogidos en esos cuerpos normativos. En este sentido, se trata de resaltar la importancia de estos principios por sobre los mecanismos procesales específicos consagrados en la ley. Los jueces deberán trabajar integrando las normas procedimentales con las de carácter constitucional e internacional, interpretando y aplicando las primeras de modo que den cumplimiento a las exigencias contenidas en las dos últimas.” (Historia de la Ley N° 19.696,



mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal, Biblioteca del Congreso Nacional, págs. 18-19).

Acorde con lo señalado precedentemente, esta Corte ha sostenido consistentemente, en torno al debido proceso, que se trata de un derecho asegurado por la Constitución Política de la República que ordena que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y al efecto el artículo 19, N° 3°, inciso sexto, le confiere al legislador la misión de definir las condiciones de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal salvaguardia supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de resguardos que la Carta Fundamental, los tratados internacionales ratificados por Chile en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura, a vía de ejemplo, que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan impugnar las resoluciones con las que no estén conformes, en su caso que se respeten los procedimientos fijados en la ley con fidelidad a la Constitución y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas (SCS N° 6902-2012, de 6 de noviembre de 2012, N° 2747-13, de 24 de junio de 2013, N° 6250-2014, de 7 de mayo de 2014, N° 4269-19, de 25 de marzo de 2019, y N° 92059-20, de 8 de septiembre de 2020, entre otras).

Sexto: Que, en relación al agravio a la garantía del debido proceso, esta Corte ha resuelto uniformemente que su agravio debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del



interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento. (SCS Roles N° 2866-2013, N° 4909-2013, N° 21408-2014, N° 4269-19, N° 76689-20, N° 92059-20 y N° 112392-20)

Que, en este entendido, la declaración de nulidad requiere que sea formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de fundamento a la invalidez, pues de ésta han de derivar las consecuencias lesivas para el ejercicio de los derechos de que se trate, y que a estos efectos se entiendan vinculados al artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal.

Séptimo: Que, en particular, en relación al reproche efectuado por la Defensa, es del caso subrayar, que tal como recientemente ha dicho esta Corte Suprema, las argumentaciones formuladas por la asesoría letrada, tienen el carácter de genéricas, esto es, dicen relación con criterios predicables a todos los juicios de esta clase, y por ello este planteamiento que se hace a este tribunal, claramente, no deriva de la realidad del juicio que nos ocupa. En este aspecto, lo único concreto que alega la defensa es que el solo hecho de haber efectuado el juicio mediante la modalidad virtual y la circunstancia que un testigo recibió mensajes en su teléfono, vulnera el debido proceso, sin precisar acabadamente como aquello habría determinado la decisión de condenar a Ariel Alexander Galaz Naranjo y Paola Aurora Ahumada Jiménez, atendida su trascendencia y entidad.



Que, como se evidencia, en esta fundamentación no se sostiene alguna vulneración de derechos o garantías constitucionales claramente identificables que hayan incidido causalmente en el resultado del juicio, de manera sustancial como lo previene la causal de nulidad empleada por la defensa.

Con todo, valga reiterar que el reclamante no explica a esta Corte –de la manera concreta y específica exigible en un recurso de derecho estricto– cuál es la precisa garantía constitucional personal que le fue desconocida con directa influencia en la sentencia condenatoria dictada en su contra. (SCS Rol N° 59504-20 de 22 de junio de 2020, Rol N° 104468-20 de 13 de octubre de 2020 y Rol N° 112392-20 de 3 de noviembre de 2020)

Octavo: Que, finalmente, en lo que concierne a los cuestionamientos de la defensa, resulta atinente mencionar lo señalado por el Tribunal Supremo Español, quien manifestó que “el uso de la videoconferencia permite la total conexión en los puntos de origen y destino como si estuvieran presentes en el mismo lugar, con lo que se da cumplimiento a la premisa de que se celebre la actuación judicial en unidad de acto. No se vulnera ningún principio procesal al poder dirigir las partes a los testigos las preguntas que sean declaradas pertinentes con contradicción y sin que pueda existir indefensión ni vulneración de la tutela judicial efectiva” (STS 2163/2019, Sala de lo Penal, Sección 1a, de 27 de julio de 2019, recurso 1376/2018).

Que, complementando lo anterior, útil resulta recordar que el Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en Roma el 17 de julio de 1998, incorporó entre sus previsiones algunos preceptos que abren la puerta a la práctica de actos procesales conforme a las nuevas tecnologías, lo que también fue avalado por el Convenio de la Unión Europea relativo a la

asistencia judicial en materia penal celebrado por Acto del Consejo de 29 de mayo de 2000.

Noveno: Que, en consecuencia y por las razones antes desarrolladas, las contravenciones denunciadas carecen de sustento fáctico y de la sustancialidad que la hipótesis de nulidad en estudio exige para producir los efectos que le son propios, esto es, que sea insalvable ante el derecho al debido proceso, conforme ya se explicitó en los razonamientos que anteceden, razones por las cuales esta causal será desestimada.

Décimo: Que en lo que atañe al motivo subsidiario -artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal-, esta Corte ya ha señalado que toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo.

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la



estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre las razones de la decisión de una determinada manera -y no de otra-, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Undécimo: Que, al mismo tiempo, la fijación de los hechos y circunstancias que se tuvieron por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 ya citado. Atendiendo a esta norma, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de prueba, únicos o plurales, por los cuales se dieron por probados los hechos y circunstancias atinentes a la litis.

Duodécimo: Que tal exigencia de fundamentación ha sido debidamente satisfecha por la sentencia que se revisa. En efecto, el fallo extrae conclusiones del análisis de la prueba, como resultado de un proceso valorativo de cada uno de los elementos de convicción rendidos, tanto respecto de los hechos objetivos integrantes del tipo penal atribuido como de la conducta desplegada por los acusados.

En las condiciones expresadas no puede catalogarse como carente de lógica y comprensión el fallo impugnado, como demanda el artículo 342 del Código Procesal Penal, desde que la sentencia entrega los basamentos que conducen a la decisión alcanzada respecto del delito pesquisado, fundado en el análisis singular y conjunto de las probanzas producidas, lo cual surge de la lectura de los considerandos del fallo. Tales consideraciones conducen a una conclusión unívoca, como expresa la sentencia, cuya inteligencia se justifica en virtud de los argumentos explicitados en ella y que no han sido desvirtuados por el recurso, por lo que sólo resta concluir que la impugnación formulada por

la defensa da cuenta de una mera discrepancia con la conclusión referida a la forma de atribuir autoría a la acusada Paola Ahumada Jiménez en el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, así como desechar la alegación de la defensa de estimarla autora de un delito de receptación, juicios que el tribunal sustentó suficientemente como se advierte de los motivos décimo y undécimo y especialmente en el fundamento décimo tercero de la sentencia, por lo que la imputación relativa a una presunta falencia en el razonamiento no será admitida.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372, 373 letra a), 374 letra e) y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa de los acusados Ariel Alexander Galaz Naranjo y Paola Aurora Ahumada Jiménez contra la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en la causa RUC N° 2000476131-7, RIT N° 3-2021, y el juicio oral que le precedió, los que, por ende, no son nulos.

Se previene que el Ministro señor Llanos, concurre al rechazo de la primera causal del recurso, teniendo para ello únicamente presente:

1.- Que el artículo 1° del Código Procesal Penal preceptúa que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un juicio oral y público, estimándose que el principio de inmediación (junto a los de continuidad y concentración) constituye un elemento indispensable de la oralidad, encontrándose recogido, respecto del juicio oral, en varias disposiciones de dicho estatuto normativo y en virtud de las cuáles el tribunal sólo puede juzgar con el mérito de la prueba rendida durante la audiencia del juicio oral (artículo 340 inciso 2°), debiendo asistir ininterrumpidamente los jueces a la misma a fin de que observen directamente la prueba, bajo sanción de nulidad (artículo 284), sin que por



regla general pueda darse lectura a registros policiales o del Ministerio Público (artículo 344) ni a declaraciones anteriores de testigos o peritos (artículo 329). Tales disposiciones revelan que la regla respecto de la forma de desarrollo del juicio –a fin de dar cumplimiento a los principios de publicidad, oralidad e inmediación- debe ser la presencialidad, y solo excepcionalmente, por circunstancias extraordinarias –como las sanitarias derivadas de la pandemia del Covid 19- pudiere efectuarse de manera telemática, como aconteció en la especie. Esto último, a condición que se adopten los resguardos necesarios a fin de garantizar la fiabilidad del material probatorio aportado al juicio;

2.- Que en el caso sub iudice, se está en presencia de la situación excepcional antes indicada, y se cumplió con la condición ya referida respecto de que la prueba aportada se rindiera en condiciones de descartar reproches en cuanto a su fiabilidad. En efecto, es un hecho no controvertido que la declaración del testigo que motivó la impugnación fue prestada en presencia de un ministro de fe; sin que la parte impugnante acreditara que los mensajes que recibió en su teléfono celular durante el receso estaban destinados a influir respecto de sus dichos;

3.- Que conforme a lo anterior, no se advierte de qué modo la circunstancia que denuncia el recurso vulneró los derechos procesales del imputado, y cuál fue el perjuicio concreto que de ello derivó. Puestas así las cosas, no aparece que el defecto que se invoca –que, con todo, no aparece acreditado- tenga el carácter de esencial, influyendo en lo decisorio de la sentencia recurrida, exigencia que consagra el artículo 375 del Código Procesal Penal para que el recurso de nulidad pueda prosperar, y que no hace más que recoger el principio de que no existe nulidad sin perjuicio, el que además de ser denunciado, debe ser establecido. Como se ha dicho en



doctrina, "...no basta con la mera enunciación del derecho o de la garantía, sino que ella debe haber tenido un carácter de substancial. Debemos entender que la infracción a una garantía o derecho reviste un carácter substancial cuando la inobservancia de las formas procesales importa la violación de un derecho o garantía que ha atentado contra las posibilidades de actuación del interviniente del procedimiento que deduce el recurso" (Cristián Maturana Miquel y Raúl Montero López, "Derecho Procesal Penal", tomo II, pág. 1227);

4.- En tal virtud, no es posible concluir en este caso el hecho que se denuncia haya limitado las posibilidades de actuación del imputado que recurre, no pudiéndose establecer la infracción substancial o trascendente del derecho constitucional que se invoca.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito y de la prevención, su autor.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 31.702-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., el Ministro Suplente Sr. Raúl Mera M., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firma el Ministro Sr. Brito no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.





En Santiago, a siete de septiembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

